

Recursos para seguridad y resultados

Según la última versión del índice de victimización de Paz Ciudadana-Adimark, durante el primer semestre de 2009 en un 37,5% de los hogares algún miembro fue víctima de robo o intento de robo, lo que equivale a una caída de 0,6 puntos en relación al mismo período del año pasado y a una baja de 0,4 puntos respecto de 2005.

Estos valores muestran la tendencia al estancamiento en las cifras delictuales del país, a pesar del creciente esfuerzo de gasto que realiza el Gobierno a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta situación refleja que el principal instrumento con que el Gobierno ha enfrentado la delincuencia, y en el cual ha invertido cerca de US\$ 7.000 millones desde 2006, es insuficiente. El diagnóstico es claro: se requieren mejoras institucionales, inversión en capital humano, establecer mecanismos de evaluación de los programas implementados y avanzar en la innovación y conocimiento; nada de esto es prioridad para las autoridades.

MARIA ELENA ARZOLA

*Investigadora
Libertad y Desarrollo*

En este contexto, un aspecto crítico tiene que ver con la necesidad de focalizar los recursos, asignándolos de acuerdo a las necesidades particulares. Por ejemplo, la evidencia señala que una importante proporción de los delitos son cometidos por una pequeña fracción de personas con características comunes. En efecto, la mitad de los menores en conflicto con la justicia viven en 23 comunas, de ahí la necesidad de destinar recursos a esos niños en particular a través de intervenciones focalizadas en vez de universales.

La encuesta de Paz Ciudadana-Adimark también muestra evidencia en este sentido. De acuerdo a ella, el 60% de los hechos delictuales



“Probablemente
US\$ 7 mil millones
pudieron usarse de
modo más eficiente”

ocurridos en el país se concentra en 14% de los hogares (éstos han sido víctimas de tres o más delitos), razón por la cual sería interesante profundizar en esa información y buscar los patrones comunes en estos hogares para poder determinar la mejor manera de asistirlos.

Finalmente, si bien se puede argumentar que los resultados de las políticas y programas hasta ahora implementados podrían tardar en manifestarse, la ausencia de evaluaciones hace que aun en el mediano plazo sea imposible precisar el efecto concreto que cada medida ha tenido en las cifras de victimización. Como tampoco se conoce el monto de recursos destinado a los programas, es imposible determinar la eficiencia en el uso de los recursos y las mejoras que puedan realizarse.

Lo peor de todo es que los US\$ 7.000 millones probablemente pudieron usarse de manera más eficiente.